

El pequeño pacto italiano —el grande sería el "compromiso histórico"— se ha cumplido, y el viernes, la izquierda —comunistas, socialistas— se abstuvo en la votación del plan de austeridad presentado por el Gobierno demócrata-cristiano, con lo cual ha sido aprobado. El resultado de la votación es bastante claro: 265 votos a favor —los diputados del Partido Gubernamental, más una pequeña minoría lingüística—, 44 votos en contra —11 extrema derecha: los fascistas— y 311 abstenciones: toda la izquierda. Una izquierda que, unida, podría gobernar. Si la dejasen; a pesar de su mayoría parlamentaria y, desde luego, nacional, no la dejan. Se sabe quiénes. La OTAN, los Estados Unidos, el gran capital italiano e internacional: e incluso quienes amenazan con un golpe de Estado que, quizá, fuese posible. No es democracia todo lo que reluce, y ya se sabe lo que significa esta palabra en Occidente ahora.

No es fácil para esta izquierda parlamentaria convencer a la izquierda de la calle de que su actitud parlamentaria es correcta, o es la única posible en este momento. Mientras el Parlamento votaba, las huelgas se multiplicaban: huelgas con las cuales se estaba explicando y demostrando que la reforma económica, de esta forma favorecida por la izquierda con el arma de la tolerancia que es la abstención, no conviene al pueblo. Los impuestos suben enormemente, y no sólo para los ricos. Los ricos tienen más fácil el sistema de la fuga fiscal. Suben para los trabajadores y para los asalariados, que ven en este plan una forma de hacerles pagar a ellos el dinero perdido en el largo Gobierno de demócrata-cristianos y socialistas que ha favorecido las manipulaciones de capital y ha creado una deuda exterior evidentemente catastrófica. Para conformar a esos protestantes de la calle y del campo, socialistas y comunistas critican el plan de austeridad de Andreotti: éste explica claramente que el pueblo debe soportar sacrificios porque la nación lo requiere así, pero —dicen socialistas y comunistas— no explica bien cómo se va a administrar el dinero obtenido del pueblo a costa de esos sacrificios, y a quiénes va a favorecer su administración.

Los sacrificios, en democracia, requieren el consentimiento de los sacrificados. Es uno de los problemas de esta clase de régimen. Se ha tratado de conseguir la aprobación de los sacrificios populares por medio de la abstención del Partido Comunista: se supone que habrá otra clase de sacrificados que los grandes industriales. Pero hay un problema de credibilidad. Es in-



Berlinguer aparece seguido del PCI, Eduardo Perna, jefe del sector comunista del Parlamento, y de Giorgio Napolitano, alto consejero económico del partido, pocos momentos antes de entrevistarse con el primer ministro democristiano, Giulio Andreotti.

El pequeño pacto italiano

terezante exponerlo, porque de alguna forma tiene paralelos en España hoy. Las clases populares no tienen confianza en la participación real en el sacrificio de las clases ricas, a las que ven vivir de una manera ajena a todo sacrificio. Ni siquiera aun cuando les alcancen las restricciones económicas, los ricos estarán "sacrificados" en el sentido tremendo de la palabra. Una pérdida del 20 por 100 de sus ingresos molesta a los ricos: una pérdida del 10 por 100 de los suyos destroza a los no privilegiados. Otro problema de falta de credibilidad es el de que con la austeridad puede restaurarse el valor del dinero. Se trata de restringir los gastos y forzar de alguna manera el ahorro: pero nadie cree, ni siquiera los que tienen capacidad de ahorrar por la cantidad de sus ingresos, en la revalorización del dinero: prefieren gastarlo inmediatamente, invertirlo en un consumo de aquí y ahora —como, por otra parte, se les ha estimulado a hacer por los resortes de la sociedad de consumo en la que han vivido y están viviendo— para obtener una satisfacción inmediata de él. Cuando advertimos la incapacidad italiana —o española— para no des-

pilfarrar, tratamos siempre de acusar ciertos rasgos de carácter o de psicología, sin detenernos en un análisis mayor de las circunstancias sociales y económicas en que ese dinero que se gana se va a gastar inmediatamente. Hay algunas otras razones, también con un paralelo: Italia es un país nuevo rico. Y repentina, inesperadamente empobrecido. Italia es un país que exportaba enormes cantidades de mano de obra a América y a otros países porque no podía sostener a todos sus ciudadanos, y aún sigue enviando italianos a los países del Mercado Común, cuando las circunstancias económicas generales de Europa lo permiten. La nueva riqueza italiana llegó con el final de la guerra, en forma de Plan Marshall y de ayudas continuas de los Estados Unidos, y creó evidentemente una nueva burguesía con ansia de tener las satisfacciones adquisitivas —repetimos que acrecentadas por los resortes de la sociedad de consumo— que no habían tenido sus antepasados, ni las generaciones vivas en ese momento. Cuando le ha legado la pobreza, Italia no estaba de ninguna manera asentada sobre una solidez

económica como lo estaban ya otros países gemelos —Inglaterra, Francia, Alemania...—, ni siquiera en las grandes zonas industrializadas del Norte. No le es fácil ahora volver a una situación parecida a la anterior. Las nuevas burguesías toleran muy mal un descenso, un desclasamiento. Por lo tanto, en Italia la demanda sigue existiendo sobre los artículos de consumo —como sigue, no perdamos mucho el hilo del paralelismo en España— y se tropieza invariablemente con las alzas de precios que no cesan y con los ahorros que se funden, bien porque perecen en las cuentas corrientes, bien porque la Bolsa cae. De alguna manera hay que invertir los dos grandes motores que están animando la vida nacional, el crecimiento y el consumo. Es un golpe rudo.

Esta tensión y la incredibilidad en que los ricos vayan a sufrir o a sacrificarse, aunque ni siquiera fuese en la misma medida de los pobres, están creando una disensión dentro de la izquierda que critica la actitud de sus parlamentarios. El Comité Central del Partido Comunista Italiano se reunió durante tres días en la última decena del mes pasado y las contradicciones de esa política de tolerancia hacia el Gobierno se pusieron muy de manifiesto. La posición inicial del Partido fue, como se sabe, que se podían y debían aceptar las restricciones de la clase obrera, a condición de que las hubiera también sobre la clase económicamente dominante, y que el Partido participase en la elaboración del plan de austeridad. Dentro de la oposición en el seno del Comité Central, se ha reprochado a Berlinguer, secretario general, que no haya exigido al Gobierno que las medidas de austeridad fueran "mucho más graves" en lo que se refiere al equilibrio económico de las clases sociales, una mayor "evaluación del peligro inflacionista" y una mejor "definición de la línea de conducta". Es el propio presidente del Partido, Longo, el que ha deplorado que no haya habido un mejor sentido de la responsabilidad: "El balance es más bien negativo", ha dicho. En realidad, el Partido Comunista Italiano está alcanzado de lleno por el problema de su larga situación. El Partido se encontraba en una oposición absoluta, rechazado por todos los grupos políticos y emitiendo continuamente sus votos negativos en el Parlamento, conduciendo una lucha abierta contra el poder. Su programa era también absoluto, en el sentido de que trataba de presentar una alternativa al sistema económico y político que lo variase enteramente: las socializaciones, las cogestiones. Precursor de lo que ahora se llama "eurocomunismo", a partir de Togliatti y más directamente por la nueva línea de Berlinguer, el Partido se ha

El pequeño pacto italiano

encontrado con la imposibilidad de gobernar por sí solo, e incluso con la de participar en el Gobierno con ministros. Ha buscado un pacto. ¿Es ya el mismo comunismo? El propio Luigi Longo emite sus dudas: "La medida de nuestra sensibilidad y de nuestra responsabilidad nacionales está dada por la capacidad de ser lo que hemos sido y somos: esto es: nuestra capacidad de exaltar y no de alterar nuestra capacidad de comunistas". El problema que está viendo ya Luigi Longo, y que indudablemente está comenzando a suceder, es el de una pérdida de confianza de los obreros con respecto al Partido y su dirección. Todavía el Partido representa diez millones de trabajadores, y todavía dispone de ellos. Es con esa fuerza con la que cuenta el Gobierno al solicitar la aprobación —en forma de abstención— del PCI a su plan de austeridad.

Pero todo dependerá no del plan mismo, sino de sus resultados prácticos y tangibles, que ahora no se pueden prever. Si éstos alteran seriamente la capacidad adquisitiva del obrero, no ya en el consumo más o menos superfluo, sino en su propia subsistencia diaria, el Partido Comunista tendrá que abandonar al Gobierno a su suerte y votar negativamente en el Parlamento: se produciría la crisis. La alternativa es probablemente una escisión grave en el Partido.

Pero la "línea Berlinguer" va más allá, o quiere ir más allá, de las meras circunstancias actuales. Con este pequeño pacto quiere llegar al "compromiso histórico", cuando el momento parezca propicio. Es decir, cuando se haga aceptar a los aliados occidentales que Italia puede tener ministros comunistas en su Gobierno sin necesidad de destrozar el juego occidental, y cuando los derechistas, que sueñan con un golpe de Estado, comprendan que sería seguido de una huelga general revolucionaria que les impediría el éxito. Es un camino arduo: tanto por la resistencia exterior —exterior a Italia y exterior al Partido, dentro de Italia— como por la resistencia interior, que teme la desnaturalización del Partido o del ideario general comunista, dentro de una red de pactos y compromisos que le quitarían definitivamente su carácter de vanguardia del proletariado.

El fondo de la cuestión, para el Partido y para el plan de austeridad, es lo que en el debate del Parlamento se ha llamado "el costo del trabajo". Para la derecha, la falta de inversiones nacionales y extranjeras que han minado la economía nacional se debe, sobre todo, al costo del trabajo, que, según ellos, es mayor en Italia que en otros países (naturalmente, el cos-

to del trabajo no se puede nunca considerar intrínsecamente alto o bajo, sino solamente en función de otros índices: claramente, de índices de precios: un obrero puede resultar más caro en Italia que en España en cifras absolutas, pero será más barato si la proporción del costo de la vida es superior: se trata de un ejemplo y no de una comparación). Comunistas y socialistas han explicado que la "huelga de inversiones" —y eso sí es algo que concretamente está sufriendo España, y también la derecha lo achaca al "elevado costo del trabajo"— tiene otras razones que no son el precio de la mano de obra.

En este tema, el plan de austeridad deja abierto un plazo. Durante un mes, los grandes industriales —reunidos en la Confindustria— y las tres confederaciones sindicales del país van a negociar entre sí la reforma de la escala móvil desde un sentido puramente realista y, por lo tanto, la adecuación entre precios y salarios. Es quizá una solución democrática, dejar que ambas partes en presencia negocien por sí mismas y no por el arbitrio del Gobierno, y todos los parlamentarios lo han considerado así —y, por lo tanto, satisfactoria— en estos momentos. Pero no hay ninguna seguridad de que estas negociaciones de un mes lleguen a una solución aceptable. A no ser la urgencia que sienten las dos partes. Y la necesidad de defenderse de los dos extremos.

Porque, como sucede siempre, los extremos nacionales son los más reacios a la aceptación del plan y de las negociaciones. Para los fascistas, el Gobierno está avanzando peligrosamente en el camino que conduce al comunismo, y a ello se debe, sobre todo, su voto negativo en el Parlamento (por otra parte, el plan en sí no hubiera merecido la negativa de muchos de entre ellos, de no haber estado apoyado por comunistas y socialistas); por otra parte, los grupos a la izquierda del comunismo, que están viendo un avance hacia el capitalismo más duro y que consideran que el Partido Comunista ha traicionado sus intereses de clase. Los extremos nunca tienen fuerza en un país hasta que se produce una situación límite: entonces son ellos los que dirigen la coyuntura.

La situación límite puede llegar a producirse. La base real del Gobierno, como se ve, es muy escasa. El Gobierno se instala sobre situaciones provisionales y requiere la tolerancia de la mayoría de la nación. En cualquier momento puede acabarse esta tolerancia, o extenderse de tal forma las huelgas, que hagan imposible el plan de austeridad. El Partido Comunista puede —instado por su propia izquierda— cesar en su abstención y votar en contra. Se abriría una crisis grave. ■

Hans Ulrich Rudel:
¿profesional brillante o nazi servidor de Hitler?



RFA

El caso de los militares nazis

ALEMANIA Federal no ha sabido resolver todavía en su conciencia la contradicción entre unas victorias militares excepcionalmente brillantes en la segunda guerra mundial —aunque todas fueran a acabar en la más horrible derrota de la Historia universal— y el espectro del nazismo. No debe ser fácil pertenecer a un pueblo acusado colectivamente de los peores crímenes del mundo (lo cual no es técnicamente cierto: pocos grandes países podrían tirar la primera piedra en acusar de atrocidades a otros, y, sin embargo, la tiran) y obligado a una rehabilitación perpetua. En este movimiento de conciencias contradictorias está el caso de los generales destituidos, Krupinski y Franke. Estos generales en ejercicio acudieron a un homenaje al general Rudel, que fue un gran combatiente del Hitler, homenaje al que asistían antiguos nazis. ¿Fue Rudel un militar brillante, que sirvió a su patria con su profesión, sea cual fuese el régimen al que servía, o fue un nazi al servicio de Hitler? Si la pregunta se resuelve en su última parte, los generales en ejercicio son culpables de haber asistido a una resurrección militar del régimen caído y castigado. Si, en la primera, no son más que unos militares admiradores de otro militar, y el ministro de Defensa que les ha destruido se ha equivocado.

Este debate no se puede conducir sin impurezas. Porque la conciencia sigue empañada. El hecho es que Rudel no es tan aséptico como le quieren mostrar sus partidarios, y no tanto por su actuación militar en la guerra —que está fuera de dudas— como por sus palabras y sus escritos actuales, en los que se muestra de una derecha extrema, a la que muy bien se puede llamar nazismo.

Pero otra pregunta: ¿Tienen o no derecho los militares a tener opinión política? En Alemania Federal se estima que sí, y que democráticamente no puede ser de otra manera. Aun en el caso de que esas opiniones puedan ser de una extrema derecha lindando con el nazismo.

Pero el ministro de Defensa tiene otros argumentos. Primero, les acusa de desobediencia: la reunión estaba prohibida, y ellos asistieron. Segundo, "no se han ajustado a los principios que inspiran las instituciones democráticas del Estado Federal alemán". Esta segunda acusación, ¿es política o se refiere a su servicio militar activo? Pero si existiese muy desarrollado en el Ejército alemán federal ese espíritu, ¿no habría peligro de un golpe militar que deshiciese las instituciones democráticas? La pregunta inmediata es la de saber si efectivamente en el Ejército alemán, naturalmente dirigido por militares que participaron en la guerra, tiene muy desarrollado ese sentimiento antidemocrático. Las respuestas tampoco son objetivas en Alemania Federal: la opinión más a la izquierda sostiene que el espíritu nacionalista, revanchista y en cierto modo nazi prevalece en el Ejército, y las a la derecha, que el Ejército está ahora, y antes, compuesto exclusivamente de profesionales, que lo único que desean es defender el régimen establecido. En cierta forma, el Ejército alemán federal se compone menos de aristócratas, de prusianos, de militaristas —por decirlo así— que de técnicos que estudian una carrera cada vez más difícil, y que salen de unas clases medias adineradas. Esta condición de técnicos les alejaría más de las tentaciones atrayentes del poder. Pero ¿es así? ■